⁴³ MORGADE, G. (1997) «La docencia para las mujeres», en MORGADE, G (comp.) *Mujeres en la Educación. Género y Docencia en la Argentina (1870-1930)*, Buenos Aires, Miño y Dávila, pág. 81.

⁴⁴ SARLO, B. (1998) «Cabezas rapadas y cintas argentinas», en *La Máquina Cultural*, Buenos Aires, Ariel. Rosa del Río, la protagonista de esta historia, llegó a ser Directora de una escuela primaria, de lo contrario su destino hubiese sido trabajar como oficial en el taller de su padre.

⁴⁵ ALLIAUD, A., *Op. Cit.*, tomo II, pág. 152.

⁴⁶ MORGADE, G. (1992) «La docencia para las mujeres: una alternativa contradictoria en el camino hacia los saberes legítimos», en *Propuesta Educativa* N° 7, Buenos Aires, pág. 53-62.

⁴⁷ GÁLVEZ, M. (1946) *La Maestra Normal*, Buenos Aires, TOR., pág. 39-40.

⁴⁸ CHAVARRÍA, J. M. (1947) *La Escuela Normal y la cultura argentina*, Buenos Aires, El Ateneo, pág. 431.

La fuerza ¿derecho de las bestias o de la razón? Ciudadanía restringida y educación en Argentina (1955-1958)

Adrián Ascolani*

Resumen:

Este artículo analiza la relación entre educación formal y derechos de ciudadanía durante el período inmediatamente posterior al derrocamiento del gobierno Justicialista, autodenominado de la Revolución Libertadora. Especialmente se describen los procedimientos de supresión de la propaganda política peronista en el ámbito escolar, la restauración de leyes educacionales e instituciones previas, y las nuevas relaciones entabladas con las agrupaciones gremiales docentes. Se procura observar, tras las manifiestas diferencias ideológicas existentes entre ambas fuerzas políticas, las similitudes existentes en cuanto a acciones estatales excluyentes en el terreno político y la permanencia de determinadas estrategias inclusivas en el terreno social y económico. Se ha tomado como estudio de caso la provincia de Santa Fe, utilizando como fuentes privilegiadas los sumarios administrativos y la normativa decretada por el gobierno cívico-militar cohesionado bajo la consigna del antiperonismo.

Abstract:

This article analyzes the relationship between formal education and citizen rights during the period immediately after the overthrow of the Peronist government in 1955, the so-called «Revolución Libertadora». We describe the methods used for eliminating Peronist propaganda from the schools, the restoration of legislation on education and of educational institutions, and the new relationships which were established with the teachers' unions. In spite of the obvious ideological differences between the Peronist government and the post '55 regime, there are certain similarities between government policies of political exclusion combined with the continuation of strategies for social and economic integration. Our research was based on the analysis of official documents of the province of Santa Fe regarding educational workers' possible connections with Peronist politics, as well as the examination of the educational laws and guidelines set forth by the military-civilian coalition which banded together under the anti-Peronist watchword.

* Universidad Nacional de Rosario.

El presente trabajo intenta reconstruir del proceso de *desperonización*, es decir de desarticulación de las instituciones y convenciones instauradas por el peronismo -en tanto gobierno, movimiento social e imaginario- llevado a cabo en el sistema educativo santafesino durante los gobiernos de la llamada Revolución Libertadora¹. Para ello hemos analizado fundamentalmente documentos oficiales, especialmente el corpus de resoluciones y decretos vinculados a la Dirección del Personal de la Educación que permite ver la substanciación de centenares de sumarios administrativos, que fue publicada en su totalidad como anexo del *Boletín de Educación* de la Provincia de Santa Fe. Al tomar específicamente Santa Fe, nuestro objetivo no ha sido provincializar una problemática obviamente de contorno nacional, sino observar en un caso concreto la aplicación de medidas políticas que, en buena medida, eran uniformes para toda la Nación, a fin de establecer cuál ha sido el rol y las características de la educación en un contexto de ciudadanía restringida. En este sentido, nos ha interesado especialmente observar la intensidad, modalidades y justificaciones con que la Revolución llevó adelante el proceso de desperonización en el ámbito educativo, problemática sobre la cual la producción bibliográfica existente revela un vacío considerable².

Para introducirnos en el tema, partiremos de la premisa de que el peronismo fue un régimen que combinó un tipo de ciudadanía inclusiva con otra excluyente. Fue inclusivo porque desarrolló una ciudadanía social con sentido universalista pleno; en el ámbito educacional, la mejora de las condiciones materiales extraescolares que aseguraron por primera vez una firme ampliación de la matrícula y una mayor retención escolar son el ejemplo más claro de esto. Pero, al propio tiempo fue excluyente -en un registro no jurídico- en lo concerniente a los derechos de ciudadanía civil y política, puesto que los particularismos en la asignación de ciertos beneficios y promociones sociales -para nuestro caso, por ejemplo el acceso a la condición de docente- atentaron contra la voluntad de comunidad inclusiva³, en términos universalistas, a la que se aludía el discurso justicialista-. Esta voluntad, sustentada en una concepción organicista del funcionamiento social, se materializó en un insistente intento de persuasión coactiva. El magisterio fue uno de los sectores laborales más afectados por las presiones del justicialismo como gobierno⁴, y del peronismo, como movimiento social. El hecho de no haber respondido como la mayor parte de los trabajadores al llamado de Perón le costó un tratamiento duro por parte del gobierno. Sus organizaciones gremiales fueron reemplazadas por otras directamente vinculadas al Estado, sin importar el limitado consenso conseguido entre los docentes.

La «Revolución Libertadora» tuvo como proyecto desandar todo lo hecho por el gobierno depuesto, y esto representó en el ámbito de la educación primaria y secundaria una vuelta a los criterios e instituciones previos, establecidos por la legislación y reglamentación anterior a 1943. La educación universitaria, en cambio, sería renovada debido al peso que el Reformismo tenía dentro de las fuerzas cívico militares revolucionarias⁵. En este trabajo nos referiremos únicamente a los subsistemas primarios y secundario.

Borrar todo vestigio

La desperonización no tuvo puntos intermedios; como es sabido, intentó hacer desaparecer de su presente y del pasado todo vestigio del régimen caído, eliminando toda referencia a ese «otro» de mentalidad «totalitaria», e incluso tratando de hacerlo no visible mediante la exclusión individual de la burocracia estatal y cercenándole las posibilidades de representatividad política, aunque no de participación en un sistema político controlado. El derecho de «conquista» impuesto sobre las voluntades individuales por una Revolución, que más que libertadora era «restauradora», terminaba siendo más excluyente de lo que había sido la persuasión coactiva que el peronismo antes aplicó a sus opositores.

La Revolución volvía a emplear la lógica de la exclusión de los disidentes instaurada por el peronismo, pero trasladándola incluso al terreno de la vida privada; un lugar donde ni explícitamente, ni jurídicamente, aquel había llegado. Sin embargo, el peronismo había mostrado una soberbia mayor a la Revolución puesto que se afanaba por imponer a toda costa algo nuevo: su «doctrina». La Revolución, en cambio rescataba los valores tradicionalmente aceptados por la argentina liberal, compartidos incluso por los nacionalistas no populistas y los católicos militantes.

La disolución del Partido Justicialista fue acompañada de la prohibición del uso de cualquier medio y objeto de propaganda del gobierno depuesto, con penalizaciones que iban desde prisión por unos días o multas menores, hasta multas millonarias, clausura de empresas comerciales y prisión por seis años para quienes no cumplieran la norma⁶. Establece el decreto del 5 de marzo de 1956:

«Se considerará especialmente violatorio de esta disposición, la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo o la bandera peronista, el nombre propio del pre-

sidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones «peronista», «justicialismo», «justicialista», «tercera posición», la abreviatura 'P.P.', las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales denominadas 'Marcha de los muchachos peronistas' y 'Evita capitana' o fragmentos de las mismas, la obra 'La razón de mi vida' o fragmentos de la misma, y los discursos del presidente depuesto y de su esposa o fragmentos de los mismos»⁷

Efectivamente, el control político que el gobierno justicialista intentó imponer al magisterio había sido una acción demasiado evidente, cuyo estilo puede ser ilustrado con este pasaje de la disposición tomada por la Directora General de Escuelas Profesionales para Mujeres, Ivone Prause, -que le valió la cesantía en 1955-, cuyo texto refleja algo más que la prohibición de hacer política en las escuelas:

«Las direcciones deben cuidar que dentro de la escuelas el personal y alumnado no sostenga conversaciones ajenas a asuntos escolares, tales como las críticas al Superior Gobierno, a sus instituciones y a su doctrina, estando facultadas las direcciones a suspender a quien o a quienes procedan en contra del buen orden»⁸

El efecto represivo de la Revolución tuvo una demora inicial debido a la propia indefinición del primer momento revolucionario. El año escolar 1955 tuvo un final precipitado y poco convencional para la tradición de la enseñanza secundaria argentina: incluso los futuros docentes fueron promovidos con una calificación de puntaje mínimo, mientras que las instituciones se debatían en agitadas asambleas donde docentes y alumnos comenzaban la expurgación del pasado. En este momento, el estudiantado peronista aún conservaba el derecho a expresarse, aunque con el peligro de las previsibles sanciones sociales que se avecinaban.

La desperonización tuvo manifestación inmediata en el ámbito educativo provincial. El Interventor Federal Coronel Juan B. Picca, designó como Ministro de Educación y Cultura al Dr. Antonio Arroyo apenas una semana después de consumado el movimiento revolucionario, cuyos efectos en la provincia habían sido muy rápidos y considerablemente pacíficos, debido en gran medida a la contención que la Confederación General del Trabajo había ejercido sobre las protestas populares espontáneas -cuya expresión más extendida fue la paralización de las actividades económicas⁹. El nuevo Ministro puso en marcha una serie de medidas básicas orientadas a la despolitización escolar: se sancionó el decreto de *estado de comisión* del per-

sonal docente -a fin de investigar su actuación política y escolar-, se prohibió la circulación de libros de textos que contuvieran propaganda justicialista; y se autorizó a la Dirección General de Educación, por medio de los inspectores seccionales, a la destrucción en privado de todas las láminas, bustos, emblemas, insignias y papelería depositados en las direcciones de las escuelas¹⁰.

El Decreto Ley 4258 inhabilitó para desempeñar cargos públicos, electivos, empleos en la administración pública o ser dirigentes de partidos políticos a aquellos que los hubieran ocupado durante el gobierno peronista o hubieran sido autoridades del Partido -hasta la jerarquía de secretario general de *unidad básica*-, puesto que estas personas fueron consideradas un peligro para la libertad¹¹. Cumpliendo este decreto, el Dr. Eduardo Simoniello, sucesor de Arroyo en la cartera de Educación desde febrero de 1956, ordenó que todo personal dependiente de su ministerio -sea cual fuera su condición- elevara a la Dirección General o al Inspector Seccional informes sobre su situación, a riesgo de quedar cesante si no lo hiciera. Además de las vinculaciones con el peronismo declaradas condenables por el gobierno nacional, Simoniello solicitó informes acerca de toda otra función dentro del ex partido justicialista: delegados, secretarios o representantes de jornadas doctrinarias, asesores, delegadas, censistas, subdelegadas, etc.¹²

La acción de la Revolución estuvo guiada por las ideas de *normalización* y de retomo a la situación educacional preperonista, mediante lo que debía ser un proceso drástico de despolitización de la escuela, aunque en verdad se trató de un proceso de desperonización que instauró jurídicamente la antinomia tradición argentina / doctrina justicialista, con una lógica equivalente a aquella antinomia fundante del gobierno depuesto: peronismo / antipatria. No obstante, la Revolución no permitió la propaganda de los partidos políticos en las escuelas, incluso en los momentos más tempranos de la Revolución.

Unos y otros: castigos y reparaciones

Las primeras acciones de la Revolución en el sistema educativo santafesino fueron: la reincorporación de los maestros separados de sus cargos por motivos ideológicos; el reconocimiento de las antes desplazadas Federación Provincial del Magisterio y a la Asociación del Magisterio Católico; la prohibición de los textos escolares primarios donde se publicaba la doctrina justicialista -1º y 4º grado-, recomendándose en su lugar los libros aprobados por el CGE en 1947 y 1948; el restablecimiento del *Boletín de Educación* suprimido en agosto de 1953 al crearse el *Boletín General Informativo* -

de naturaleza propagandística; y la eliminaron del régimen de *tutores escolares* por considerarlos fruto de la politización escolar¹³.

Estas reformas se dieron en un marco de investigación intensiva sobre el pasado político del personal escolar. El Ministerio de Educación intervino el cuerpo de inspectores, y numerosas escuelas de todas las modalidades y niveles. Fue decretado que todo el cuerpo docente de escuelas normales, comerciales e institutos de profesiones técnicas sería sometido a una prueba de antecedentes, en la cual se analizaron: antecedentes éticos, títulos, desempeño profesional, *vocación y formación democrática*¹⁴. Excepto en las escuelas normales, que fueron intervenidas en su totalidad, las intervenciones se hicieron exclusivamente a los establecimientos educacionales afectados por denuncias hacia su personal docente, frecuentemente efectuadas por padres de alumnos, lo cual de por sí significó decenas de intervenciones y centenares de investigaciones individuales.¹⁵

Por vía de las inhabilitaciones quedaron cesantes, como dijimos, todos aquellos funcionarios y empleados del estado a los que se les comprobó una posición dirigencial dentro del partido o del gobierno justicialista, aunque se tratara de funciones menores como las de censistas de las unidades básicas ó propagandistas en campañas electorales. También se sancionó a quienes, de un modo u otro introdujeron el peronismo en el tradicionalmente aséptico -en términos de ingerencia de los partidos políticos- sistema escolar provincial, que verdaderamente había funcionado con un alto grado de autonomía de la política, en comparación con las otras provincias. En este último caso, las causales de exoneraciones y cesantías de docentes fueron las siguientes: propagandización dentro de los establecimientos educativos, transgresiones escalafonarias por móviles o favor político, castigos a alumnos o presiones a docentes por no asistir a actos escolares de sentido partidista, o bien por no afiliarse al partido oficialmente, uso de insignias, etc.

Entre los motivos de cesantías el «fervor partidario» ocupó un lugar central. Con ello se designó a las acciones de los directivos escolares que excedieron los límites de las disposiciones emanadas de la superioridad. Valga como ejemplo algunas muestras de tal «fervor», esta vez protagonizados por la directora A. A. Rotea de Fustinoni, según quedó registrado en las actas de reuniones de personal, y fue rescatado por el interventor que propuso su cesantía:

«... en [el Acta] N° 36 del 30 de julio del mismo año [1952], dice: «Adherise en forma incondicional al duelo: suspender por un mes la música difundida por el equipo sonoro pasajes sobresalientes del libro «La Razón de mi Vida»; concurrir diariamente con una delegación de

*alumnas y maestras a rezar el Rosario, en el altar levantado en la sede de la Unión Ferroviaria; semanalmente se dictará una clase de 20 minutos destinada a recordar su memoria, etc»; o en la N° 34 del 14 de octubre de 1954 se lee: «... para conmemorar dignamente un aniversario más de la gesta gloriosa del 17 de octubre y para reafirmar también el apoyo absoluto hacia el líder y la Patria, etc».*¹⁶

Como se puede apreciar en otros ámbitos, la muerte de Eva Perón en 1952 representó para las escuelas una exacerbación de la presión del partido peronista. En los expedientes de cesantía a la regente y vice directora interina de la Escuela Normal de Villa Constitución, puede leerse que

*«... durante el año 1952, en oportunidad de hallarse a cargo de la dirección de la escuela, obligó al personal a concurrir a un «funeral cívico» de carácter político, donde aquel hubo de hacer guardia ante la imagen de la esposa del mandatario depuesto, como asimismo participar de una procesión de antorcha, lo que hizo la escuela en pleno, con su abanderado... Que por propia confesión de la imputada, se prueba que, en oportunidad del acto de colación de grados, desfilaron los alumnos frente a los retratos del mandatario depuesto y su esposa, entonando una marcha partidaria ante autoridades civiles departamentales, como asimismo el hecho de concurrir a la escuela con un enorme escudo partidario, impartiendo la enseñanza de unos versos de carácter político, si bien aduce que fue con autorización de la dirección de la escuela...»*¹⁷

Haciendo la salvedad de que el sólo hecho de ser activista peronista fue motivo para una sanción, en los sumarios se observa una clara preocupación por comprobar las acusaciones. Esencialmente, es la veracidad de éstas lo investigado, porque el estigma de la militancia no podía ser redimido ni con una brillante trayectoria pedagógica. Aparentemente, los mecanismos legales de apelaciones a que tenían derecho quienes fueron penalizados con cesantías por la Revolución funcionaron correctamente, según se desprende de la existencia de algunas revisiones de sanciones hechas por el ministro Arroyo en el momento más álgido de la desperonización¹⁸.

En caso de directivos que involucraron a la escuela con la propaganda o actos peronistas, pero no ejercieron presión sobre los docentes, los castigos fueron menos severos. Este fue el caso del director de la Escuela 181 de la localidad de Alcorta, a quien se lo descendió de categoría y reubicó en otra localidad¹⁹. La utilización del traslado como purificación de los docentes peronistas de actuación pública fue frecuente, argumentándose que su pre-

sencia resultaba perjudicial a la escuela en cuestión porque mantenía vivo el resentimiento de los políticos «democráticos» de la misma localidad o zona.

La acción del gobierno sobre el sistema educativo fue tan profunda que, en mayo de 1956, el Ministro Simoniello se aseguró el control de toda información que saliera de los organismos dependientes del ministerio con destino a los medios de prensa y las radios.

El gobierno revolucionario revisó en 1955 las calificaciones del personal docente, puesto que las consideraba viciadas -lo mismo que los nombramientos efectuados ese año-, por lo cual, para salvar la situación, mantuvo las efectuadas en 1954. En el caso de los inspectores, el carácter político de los nombramientos era evidente. Por ejemplo, en las designaciones de inspectores seccionales de enero de 1953 se estableció que:

*«Siendo objetivo fundamental la formación moral, intelectual y física del pueblo, sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina nacional peronista (...) el inspector de escuelas, como agente directo del estado debe estar ampliamente identificado con la misma, para contribuir eficazmente a su triunfo».*²⁰

Dando respuesta a la petición de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, los nombramientos de dichos inspectores fueron declarados nulos, abriéndose sumario administrativo a los involucrados²¹.

Entre las medidas reparadoras para quienes apelaron por haber sido perjudicados laboralmente por el gobierno peronista, hubo una central: la restitución de sus cargos a docentes castigados con la cesantía o excluidos por motivos ideológicos durante el peronismo reparándose así «el agravio moral» -incluso a algunos de ellos se les designó como interventores en escuelas denunciadas por irregularidades, como fue el caso de Olga Cossetini y Rosa de Ziperovich.²²

Otro acto depurador fue reglamentar en 1956 el ingreso a la carrera docente, instaurándose en el nivel medio los concursos por antecedentes y oposición²³. El espacio que se asignó en el Tribunal evaluador a las entidades gremiales del magisterio -cuatro autoridades directivas y dos representantes de las entidades gremiales reconocidas- es otra muestra del alto grado de acercamiento entre Estado y federaciones gremiales reconcidas.

En 1957, fue sancionado el Decreto Ley 09477, del 27/8/1957, de *Estabilidad y Disciplina*. Establecía que «Ningún miembro del magisterio podrá ser exonerado, declarado cesante, puesto en disponibilidad, descendido de categoría ni trasladado, mientras conserve las condiciones de capacidad técnica, física y moral que el cargo requiere»²⁴. Leído desde otro punto de

vista, esto significa que los directivos peronistas fueron cesanteados debido a que fueron juzgados como carentes, cuanto menos, de esta última capacidad. No obstante, ese mismo año se advirtió un probable ablandamiento en la investigación de los maestros que fueron activistas del peronismo. Síntomas de ello fueron las actitudes más tolerantes de algunos sumariantes hacia los acusados de militancia partidaria; la gran cantidad de denuncias desestimadas; y el levantamiento, a mediados de año, de algunas suspensiones impuestas a directivos y docentes en 1956. A medida que transcurría el año 1958 la distensión fue mayor; incluso en algunos casos se hicieron reincorporaciones a personal antes adicto al peronismo entendiendo, por ejemplo en el caso de la maestra Tisve Mauro, que casi dos años de cese «puede considerarse suficiente sanción».²⁵

Probablemente esto tuviera que ver con la inminente culminación de la Intervención revolucionaria, y con el nuevo juego de intereses abierto con el proceso eleccionario y la normalización institucional que se avecinaba.

El premio de la victoria: una democracia a la medida de las circunstancias

En los primeros días de la Revolución triunfante la desperonización de los establecimientos escolares fue acompañada de exteriorizaciones políticas de diverso signo partidario en adhesión al derrocamiento de Perón. Esta situación parece haber sido común en muchas escuelas, y el nuevo y etéreo credo revolucionario, al igual que la doctrina justicialista, no admitía actitudes pasivas. Así, el Interventor de la Escuela Normal de Rafaela señaló en su informe la falta de adhesión de la regente de la Escuela Normal, Regina Kerz Gaitán -más tarde degradada a maestra de grado:

*«Su confusión es tan palmaria, que reputa inadmisibles el uso de la escarapela nacional en un momento de júbilo democrático [el primer día de clase luego de la Revolución], pues entiende que esa insignia dejaba, en la circunstancia, de ser el símbolo de la nacionalidad para representar una tendencia política de la que no todos los alumnos participaban. Su unilateral sensibilidad no le permitió advertir, como se ve, que durante la mayor parte del período que acababa de sucumbir, la propaganda política sobrepasaba el valor de los símbolos para difundirse en cada una de las asignaturas, y no se trataba de un momento de justificable exaltación patriótica...».*²⁶

Con el mismo criterio, fue suspendida la directora Emilia Bordesio de Lehemann porque

*«... no obstante la imposibilidad de probar los actos de conspiración contra la Revolución Libertadora realizados por la señora de Lehemann, obran manifestaciones concordes y precisas respecto de la prohibición por su parte para maestros y alumnos, de exteriorizar su alegría ante el triunfo de la Revolución Nacional».*²⁷

Estas acusaciones naturalmente llevaban implícito el resentimiento por hechos previos que fueron dirimidos al efectivizarse las intervenciones. Con el transcurso de unos meses, al asumir interinamente la Subsecretaria Blanca Cabral de Hühlman, en septiembre de 1956, comenzó a notarse la necesidad de moderar esta presencia de la «política democrática» en los establecimientos escolares. De tal modo que la Circular n° 10 establece, con prudente cautela, que

*«En vista de que a algunas escuelas concurren maestros ostentando distintivos políticos; que si bien dentro de un ambiente democrático ello no implicaría perturbaciones de ninguna índole, atento al grado de cultura de quienes lo exhiben; que no obstante, siendo la escuela recinto ajeno a toda exteriorización ideológica, su uso no sería aconsejable...».*²⁸

El mismo cuidado por las ideas de los docentes está presente en el *Reglamento de Calificación* de dicho personal, puesto que además de sus cuatro bases esenciales -preparación profesional, laboriosidad, aptitudes docentes y condiciones de gobierno- señalaba que «Asimismo se tendrá en cuenta el fervor puesto en la acción tendiente al desarrollo de los sentimientos de argentinidad y a la afirmación de los principios democráticos»²⁹. Estos conceptos, tan utilizados en la historia argentina con connotaciones diversas tácitamente remitían en esta ocasión a una frágil articulación entre tradición liberal conservadora y democracia restringida. En términos generales, la Revolución rescataba los principios liberales en cuanto a concepción de funcionamiento social, estructuración económica y percepción histórico cultural.

En los ciclos de enseñanza primaria, secundaria, normal, especial y superior se incluyó entre las materias «formativas» una muy especial denominada *Educación Democrática*, en la cual además de los contenidos tradicionales sobre civismo se incorporaron otros cuya confluencia era la crítica a los regímenes «totalitarios», y particularmente al Peronismo³⁰. De esta

forma, en 1957, las alusiones al peronismo -como un fenómeno perverso, claro- volvían a aparecer en los libros escolares. Lo propio ocurrió a nivel de difusión general a partir de la circulación del *El libro Negro de la Segunda Tiranía*, obra redactada por Julio Noé que daba a publicidad los resultados del trabajo de la Comisión Nacional de Investigaciones designada por el Poder Ejecutivo Nacional en 1955.³¹

Los manuales de *Educación Democrática* ratifican las contradicciones ideológicas en que se desenvolvía del gobierno cívico-militar revolucionario, puesto que se difundían las virtudes de una ciudadanía plena en un contexto de ciudadanía restringida. Tomaremos uno de ellos: el manual escrito por el prestigioso abogado, ex diputado y profesor universitario, Carlos Sánchez Viamonte, en colaboración con el ex rector del Colegio de la Universidad Nacional de La Plata, Amaranto Avelado. En esta obra, la ciudadanía remite a los derechos y deberes cívicos y políticos. Nunca se alude a los derechos sociales, sino fugazmente y sin tomar partido cuando habla de una «verdadera igualdad» como aquella relativa a un mismo punto de partida en el desarrollo de las personas. Por tanto, la igualdad posible era la igualdad frente a la Ley; una igualdad cuyo prerrequisito era la «libertad», único freno a la igualdad del servilismo. Sentenciaba el mismo texto: «La república democrática supone una comunidad de hombres libres y dignos»³², en la cual debía prevalecer, además de los derechos recién mencionados, la soberanía popular. En ese marco, la libertad de pensamiento, expresión y reunión eran derechos inalienables, a los cuales el autor dedica un espacio considerable en el libro. La lucha contra la «tiranía» es entonces un deber cívico, y Perón es presentado como el arquetipo del tirano vernáculo por excelencia -superando incluso a Juan Manuel de Rosas-, cuyo poder de manipulación y luego de coacción lo perpetuó en el poder durante un decenio. Más allá de los aspectos autoritarios evidentes del gobierno justicialista, en esta línea de explicación hay una resistencia, aparentemente inconciente, hacia la búsqueda de una explicación profunda del fenómeno peronista; prevalece el preconceito de que Perón fue un demagogo advenedizo capaz de manejar a un electorado títere supuestamente engañado debido a su inexperiencia política.

Un orden para la democracia escolar

La democracia restrictiva implementada por la Revolución cívico militar, representó sin embargo una mayor cuota de democratización en cuanto a participación del magisterio en el gobierno escolar. El gobierno peronista

había suprimido el Consejo General de Educación, reemplazándolo esencialmente por una Dirección General de Educación dependiente del Ministerio de Educación, junto a las direcciones generales de Bellas Artes y Cultura, de Personal y de Administración (Ley N° 3554). De este modo los docentes perdieron representación directa, en un contexto en que además las organizaciones gremiales reconocidas no garantizaban una gestión sectorial autónoma.

En enero de 1956, el Interventor de la Provincia Carlos Garzoni³³ decretó la constitución de una comisión oficial encargada reorganizar la Administración escolar, y seis meses después fue restaurado el Consejo General de Educación³⁴, no obstante hasta esa fecha siguió funcionando la Dirección General de Educación. El Consejo fue pensado como un espacio de negociación, en tanto estaba compuesto por tres vocales -representantes del Ministerio de Educación, los docentes, y de las Asociaciones Cooperadoras- y un presidente designado por el Poder Ejecutivo.³⁵

Paralelamente a la reorganización del CGE, el activo ministro Simoniello inició en 1956 un proceso profundo de cambio en cuanto a la reglamentación de la carrera docente. Estos cambios relativos a los derechos y deberes del docente dentro del sistema educativo, estuvieron acompañados de otros cambios estructurales con intención racionalizadora, tales como: la reglamentación del funcionamiento y organización de las escuelas primarias nocturnas; la transformación del cuerpo de inspectores a fin de que cumplieran el rol de «consejeros técnicos»; la creación de la Oficina de Información Pedagógica dependiente de la Inspección General Técnica de la Educación y la supresión de los *centros de educación física* que funcionaban en clubes -excepto los centros de Rafaela y Esperanza-.

Los sucesivos ministerios que siguieron al de Simoniello, en el período que duró la Intervención -Rolando Hereñú (1956/57), Adelmo Montenegro (1957) y Francisco Landó (1957/58)- no mostraron la misma actividad en cuanto a reformas y normalizaciones educativas. Sí se advierte, sobre todo en 1958, la creación de varias escuelas secundarias -comerciales-, algunas escuelas fábricas en poblaciones del interior, y algunos jardines de infantes, respondiendo a la expectativa y demanda de sus beneficiarios.

El ministro Rolando Hereñú³⁶, a fines de 1956, caracterizaba la situación educativa como de crisis pedagógica y de parálisis en cuanto a iniciativas de los maestros, atribuyéndolo a la pérdida de influencia del escolanovismo, en parte fruto de la desarticulación de las últimas escuelas experimentales durante el gobierno peronista³⁷. Su propuesta fue, entonces, recobrar esa tradición -en buena parte imaginaria- de pasado escolanovista, reorganizando algunas escuelas experimentales selectas que debían ser emuladas

por el resto. Esta estrategia, sin embargo, no era nueva en la provincia, pues recuerda a las experiencias voluntarias de escuela activa desarrolladas -con muy poco éxito- en los años '20³⁸. A pesar de las ideas democratizadoras de Hereñú para el cotidiano escolar, no se percibieron en su gestión cambios pedagógicos sustantivos. Recién en marzo de 1958, durante la gestión del Ministro Adelmo Montenegro³⁹ comenzaban a visualizarse tendencias pedagógicas innovadoras, como la incorporación de contenidos sociológicos con orientación crítica, y el fomento de las actitudes de libertad y creatividad. De acuerdo con ello, hubo para los docentes primarios mayor libertad para elegir los libros de texto -excluyendo, obviamente, los prohibidos por propagandísticos-, quedando sin efecto las disposiciones de 1944/47/48 que obligaban a todas las divisiones de un mismo grado de una escuela a utilizar el mismo libro de lectura, y que durante el peronismo seguramente había sido además de motivo de conflicto entre los docentes, otro instrumento para afirmar la bibliografía oficialista.

La Intervención terminó con cierta desarticulación institucional, pues en abril de 1958 habían renunciado los presidentes del CGE y del CGEP, sin ser reemplazados en sus cargos, según se argumentó por el corto lapso que faltaba para entregar el mando a las autoridades constitucionales. En su lugar, se intervinieron ambos organismos.

Las inevitables continuidades: derechos sociales y compromisos políticos

A pesar de las sustanciales modificaciones ideológicas, en algunos ámbitos del sistema educativo no hubo transformaciones drásticas. Las escuelas fábricas, que representaban un derecho adquirido de los sectores populares fueron mantenidas y modificadas en su régimen con prudencia; lo mismo ocurrió con el Instituto Becario. Por otro lado, la oferta educativa fiscal acompañó la expansión de la demanda, heredada como consecuencia del mayor bienestar de la población trabajadora, manteniéndose las políticas de asistencialismo escolar y mejora edilicia de los establecimientos.

En enero de 1955 varias escuelas fábricas provinciales habían sido transferidas a la Comisión Nacional de Orientación Profesional, cuya finalidad, como es sabido⁴⁰, estaba más relacionada con la promoción social del alumnado que con necesidades concretas del mercado de trabajo. Después de la Revolución, la CNAOP y su delegación regional del Litoral continuaron conservando prestigio por la tarea realizada en favor del sector obrero. En abril 1956, el Interventor declaraba que la CNAOP seguía cumpliendo

en la provincia «una importante obra en beneficio de la juventud estudianta y trabajadora», por lo cual era necesario consolidar su acción otorgando a la Delegación Regional los instrumentos para que haga cumplir las leyes de trabajo de menores y la Ley 12921.

Heredado de la etapa peronista, el Instituto Becario Justicialista continuó funcionando como ente oficial con el mismo nombre pero, naturalmente, sin el aditamento partidario. Su tarea era otorgar becas para alumnos de todos los niveles y modalidades, hijos de obreros, campesinos sin recursos y empleados. Manejó un considerable volumen de dinero que fue distribuido entre centenares de estudiantes.

Los comedores escolares, dependientes durante el gobierno peronista de la Dirección General de Bienestar social, fueron incorporados al Ministerio de Educación en agosto de 1956, advirtiéndose cierta focalización en el asistencialismo escolar, pues el Ministro Simoniello estableció que la llamada «alimentación complementaria» -copa de leche, miga de pan- fueran asignadas únicamente a los alumnos que los directores de las escuelas certificaran como carenciados⁴¹. Hacia 1957 estos comedores escolares proveían alimento a 3.910 niños. La otra función asistencial que continuó a cargo del Ministerio de Educación era el servicio odontológico escolar.

La edificación escolar era otra cuestión directamente asociada a los derechos sociales. Los planes de edificación y refacción escolar en Santa Fe contemplaron para 1956 la ejecución de cincuenta y tres obras nuevas y de ampliación de edificios existentes; veintitrés de ellas estaban en marcha ese mismo año, y otras doscientas veinte escuelas fueron beneficiadas con fondos para conservación de edificios, parte de los cuales provenía de los recursos antes orientados a los campeonatos deportivos infantiles y juveniles⁴².

Además de conservar estas instituciones que representaban derechos adquiridos para sus beneficiarios, el gobierno revolucionario, liderado por el sector liberal, debió corresponder a las demandas de su aliada, la Iglesia Católica. El gobierno de Santa Fe no hizo modificaciones sustanciales en cuanto a las relaciones existentes entre Estado provincial y escuelas privadas antes de la ruptura entre Iglesia y Peronismo, aunque anuló algunas medidas relativas al traspaso de docentes de establecimientos privados -cuyos salarios pagaba el Estado- a los fiscales dispuesta por el gobierno justicialista durante el último año de gobierno. Como es sabido, en mayo de 1955, el gobierno justicialista había suprimido la Inspección General de Enseñanza Religiosa, poniendo en disponibilidad, sin goce de sueldo, a todo el personal titular dependiente de la misma y desapareciendo la materia Religión. En abril del año siguiente, si bien se mantuvo la supresión de la materia, el ministro Simoniello reincorporó a gran parte de los docentes

que la dictaban y habían pasado a disponibilidad, ubicándolos en otras asignaturas. Al continuar en vigencia la Ley n° 3669, de 1950, que regulaba el funcionamiento de las escuelas privadas, el Estado siguió aportando la mayor parte del monto destinado a sueldos de sus docentes. También fueron oficialmente reconocidas como organizaciones gremiales de los empresarios y de los trabajadores de este subsistema a la Asociación Gremial Patronal de Directores de establecimientos particulares de la Zona Sud de la provincia de Santa Fe y a la Federación del Magisterio Católico, y el gobierno incentivó el funcionamiento del Consejo Gremial de Enseñanza Privada.

Los maestros gremialistas: ante todo ciudadanos

El Interventor Arroyo, autodefinido como «gremialista por convicción», auguró a fines de 1955 que la normalización del sistema educativo se haría con la intervención de los verdaderos representantes gremiales, descalificando con ello a los sindicatos del magisterio ligados al peronismo -el *Sindicato de Maestros de la Provincia*, la *Asociación de Docentes de la Provincia de Santa Fe*, la *Asociación de Profesores y Docentes de Educación Física de Santa Fe*, y la *Asociación de Maestros de Enseñanza Manual de la Provincia*-. Su sentencia «No venimos a perseguir a nadie, pero los cercenadores de derechos estarán demás en las filas del Magisterio»⁴³, significó para estas agrupaciones la intervención y la pérdida del reconocimiento oficial.

Seguidamente, le fue negada toda participación en tribunales y comisiones de reglamentación escolar a la *Asociación de Docentes de la Provincia* -con sede en Rosario-, dado que ésta entidad estuvo directamente vinculada al gobierno peronista de la provincia, siendo la única reconocida. Esta entidad ejerció presión sobre los docentes y hostigó a los disidentes con sus delaciones. En 1956 el Ministerio no sólo rechazó su ofrecimiento de colaboración, sino que la intervino, siendo exonerado su ex presidente, Rogelio Elías Rossignol. La intervención comprobó que «... incurrió en delación y amenazas contra docentes e instituciones que no compartían su posición ideológica, según surge de las notas cursadas al presidente depuesto, su extinta esposa y al entonces gobernador de la Provincia (...) conteniendo acusaciones contra la Federación de Maestros Católicos, la Federación Provincial del Magisterio y otras organizaciones...»; también lo hizo contra varios miembros del ex Consejo General de Educación y contra un maestro en particular -en notas dirigidas al Interventor Federal (1949), al Gobernador y a un ministro nacional (1948).⁴⁴

Igualmente fue intervenido el *Sindicato de Maestros de la Provincia* -con sede en la ciudad de Santa Fe- y se rechazó el ofrecimiento de la *Asociación de Maestros de Enseñanza Manual de la Provincia* -con sede en Rosario- para participar en los jurados de concursos de inspectores y directores de talleres, por su «incondicional adhesión» al gobierno depuesto. Como la *Asociación de Docentes de la Provincia*, ésta estuvo afiliada a la *Confederación General de Profesionales* «organismo constituido para apoyar a la dictadura en sus planes políticos». ⁴⁵

La *Asociación de Profesores y Docentes de Educación Física de Santa Fe* -anteriormente *Sindicato de Profesores y Docentes de Educación Física de Santa Fe*, creado en 1950- tampoco escapó a la intervención. El dictamen de la investigación señaló «la más completa identificación y adhesión con el partido oficialista» según se desprendía de las correspondencia mantenida con la CGT y la *Confederación General de Profesionales*. En abril de 1956, cuatro meses después de iniciada la intervención, el Interventor Nacional decretó la disolución de la Asociación. ⁴⁶

El aún Subsecretario de Educación y Cultura, Eduardo Simoniello consecuente con las ideas del Ministro Arroyo, dejaba testimonio, en enero de 1956, de la resistencia pasiva ⁴⁷ que los maestros no peronistas habían mantenido:

«Sabemos de los sacrificios que la mayoría de los maestros han debido soportar en los últimos diez años. Sabemos que a ellos, y exclusivamente a ellos debe la Provincia el que las escuelas hayan sido el último reducto de democracia que, pese a la presión, la propaganda, la postergación en las justas aspiraciones económicas, los libros y programas dirigidos con fines políticos, no han podido ser sojuzgados ni sometidos». ⁴⁸

El 14 de junio de 1956, al crearse el Consejo General de Educación, el Ministro Simoniello recordaba que «... los auténticos maestros gremialistas de Santa Fe, se cuadraron firmes y decididos frente a la tiranía. Hoy, silenciosos, pero activos, están presentes a la hora de la recuperación nacional.»

La buena relación del Gobierno y el gremialismo docente no peronista era un hecho manifiesto ⁴⁹. Por primera vez, estas organizaciones gremiales, surgidas en 1928, tenían una relación de identificación con el gobierno de la provincia y ocupaban un lugar de consideración social. El hecho de que Simoniello, hermano de una de las maestras fundadoras de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, y participante en su juventud de la conducción de ésta institución, fuera ministro de educación reflejaba claramente esta vinculación.

La oposición del gremialismo tradicional santafesino al gobierno peronista también tenía motivaciones claras. La *Casa del Maestro* había sido clausurada, y la referida Asociación del Magisterio de Santa Fe, una de las agrupaciones más consistentes de la Federación Provincial, estuvo intervenida desde 1950 a 1955 -también lo había estado durante 1944 y 1945-, siendo cesanteados muchos de sus colaboradores.

El gobierno revolucionario reconoció como entidades del magisterio a las desplazadas *Federación Provincial del Magisterio* y a la *Asociación del Magisterio Católico*, dándoles representación real en los jurados para concursos de inspectores y directores, y de ingreso a escuelas secundarias de la provincia. Los acercamientos y trabajos conjuntos fueron diversos: la Federación Provincial del Magisterio realizó su 26º Congreso, el 26 de enero de 1956, con la presencia de los principales funcionarios del Ministerio de Educación; las entidades gremiales reconocidas participaron de la revisión de programas, preparación de escalafones, e incluso formaron parte de la Comisión Investigadora designada para el Ministerio de Educación ⁵⁰. Por primera vez en dos décadas el cuidado del escalafón docente era publicitado como una preocupación oficial: en noviembre de 1956, al constituirse el Consejo General de Educación, el Ministro Rolando Hereñú declaraba que la Ley provincial de escalafón docente era incompleta porque carecía de una normativa que regulara la iniciación en la carrera docente, dando lugar a posibles manipulaciones del mismo. ⁵¹

La cercanía entre Gobierno y magisterio, se evidenció en la mejoras a nivel salarial. En 1956 se pagaron sueldos, aguinaldos y antigüedad adeudados desde 1951 a maestros de diversas regiones. Posteriormente, se otorgaron bonificaciones para atemperar el aumento del costo de vida, de acuerdo a lo establecido en Acuerdo de Ministros. Sin embargo, los salarios siguieron retrasados en relación a los precios, desembocando en una intensa medida de fuerza emprendida por parte los docentes en 1957, durante los dos primeros meses de clases. Para contrarrestar la medida de fuerza el Ministerio Hereñú decretó la suspensión preventiva, sin goce de haberes y por tiempo indeterminado de los huelguistas. Abruptamente el Interventor de la Provincia, Dr. Clodomiro Carranza, designó como nuevo ministro de Educación a Adelmo Montenegro, quien inmediatamente convocó una *Comisión Pro Mejoras Económicas, integrada por partes iguales de representantes del ministerio y de las entidades gremiales, para que estudie y dictamine sobre la escala de bonificaciones*. Terminada la huelga se dejó sin efecto la suspensión de los docentes ⁵². Probablemente como consecuencia indirecta de la medida de fuerza, un mes después fue levantado el *estado en comisión* que pesaba sobre los maestros -y también sobre el resto del personal de la

administración pública-. La gestión de Montenegro marcó un cambio en cuanto a la relación entre sindicatos docentes y gobierno, puesto que anteriormente, a pesar del papel reconocido a las entidades gremiales, se observan en las disposiciones ministeriales, desde 1956, una tendencia a apoyar la representación electiva más que la corporativa. De tal modo, en el resucitado Consejo General de Educación, el vocal representante del magisterio sería electo directamente por los docentes⁵³, debiendo contar con diez años de ejercicio de la profesión y estar en actividad.⁵⁴

Los educadores de las escuelas privadas también lograron el reconocimiento de su entidad gremial, la *Asociación de Docentes Particulares de la Provincia*, la cual junto al Consejo Gremial de Enseñanza Privada, solicitó en 1956 al Ministerio que se otorgaran las mismas bonificaciones que gozaban los maestros fiscales, cuyos salarios además eran mayores a los privados⁵⁵. Respondiendo al pedido, el Ministerio acordó aportar el 80% del sueldo nominal y de las bonificaciones complementarias, con una retroactividad desde 1952.⁵⁶

Conclusiones: las tensiones de la ciudadanía restringida

La eliminación del imaginario peronista, no sólo implicó eliminación de escritos e ideas, sino también -virtualmente, en el ámbito educativo- personas, puesto que se las excluyó de los derechos políticos, por motivos de «seguridad nacional». La tarea no resultó difícil, dado el carácter abiertamente público del estilo de participación política peronista y el registro de dichas actividades proselitistas en la documentación interna de los establecimientos escolares. Más dificultades hubo para establecer quienes habían sido favorecidos indebidamente con el ingreso a la docencia transgrediendo las pautas escalafonarias porque las autoridades depuestas habían destruido la documentación probatoria⁵⁷. Las penalizaciones estuvieron dirigidas fundamentalmente al personal directivo de las escuelas que por decisión propia había profundizado la propaganda política, yendo más allá de lo impuesto por el Ministerio.

La lógica de la guerra continúa presente, a pesar de las exteriorizaciones oficiales sobre la restauración cívica. La exclusión de unos obviamente fue acompañada con la promoción de otros. La reparación hecha a los cesanteados por motivos políticos durante el peronismo no dejó de ser un premio a la resistencia interpuesta al régimen, el mismo sentido tuvo la vinculación entre Revolución y sindicalismo docente antiperonista. Estos sindicatos lograron una alta representación en los concursos docentes, sin

embargo el gobierno instauró un sistema electivo -no corporativo- para decidir la representación del sector docente en los órganos de gobierno.

Las medidas racionalizadoras, de índole burocrático-institucional, como la reconstitución del Consejo Provincial de Educación, también entraba dentro de la lógica de la despersonización, puesto que el sistema de direcciones generales técnicas instrumentado por el peronismo había mostrado que favorecía el verticalismo en la toma de decisiones. La reglamentación del ingreso a la docencia es otro ejemplo de ello, puesto que acompañaba el proceso de depuración de nombramientos clientelísticos efectuado por el gobierno depuesto. En otros ámbitos, como los subsistemas de enseñanza técnica y enseñanza privada, y el asistencialismo escolar, los cambios fueron escasos y vinculados al desmantelamiento de los circuitos de propaganda peronista.

Si observamos la relación entre derechos de ciudadanía y educación, se advierte que el gobierno de la Revolución libertadora mantuvo el régimen de ciudadanía inclusiva en lo social, puesto que supervivieron las instituciones y convenciones realmente funcionales cristalizadas durante el peronismo -el subsistema técnico de la CENAOP es el mejor ejemplo de ello-, pero fue excluyente en lo civil y lo político. Podría pensarse en una lógica de la exclusión equivalente a la del peronismo, aunque en este caso la exclusión es más fuerte porque se reafirma en el plano legal.

En última instancia, la Revolución intentaba volver a una economía y a una sociedad de mercado, y para desarticular las convenciones y organizaciones corporativas instaladas en el poder durante el gobierno peronista decidió imponer una intensa restricción a buena parte de los derechos adquiridos por los sectores populares. Contexto de limitación de los derechos civiles -pensamiento, expresión-, cercenamiento de los derechos políticos, pero mantención de los derechos sociales, entre ellos la educación, en el marco de un Estado que no dejó de ser «Benefactor», y con la serie de instituciones agregadas a las estrictamente pedagógicas que garantizaban la retención escolar y contribuían a la tarea más vasta del asistencialismo social desplegado desde el Estado.

La Revolución instaló una situación de ciudadanía política y civil restringida, pero de ciudadanía social poco diferente a la vigente antes de la caída de Perón. La educación, constituida como un derecho/obligación de ciudadanía reflejó esta ambivalencia; en tanto derecho social, no alteró su tendencia incrementalista, pero la estructura burocrático-institucional del sistema educativo quedó sometida a las restricciones ideológicas aludidas.

Además de derecho social, la educación ha sido condición de ciudadanía civil. Este es otro elemento explicativo de la voluntad de la Revolución

por cubrir las demandas crecientes de educación. La efectiva ampliación de la asistencia a la escuela pública representó una promoción de la ciudadanía, al igual que lo fue el incremento de la edificación escolar fiscal, con su intención de asegurar un lugar físico a una mayor proporción de alumnos.

Como bien señala J. Capella, la condición de ciudadano requiere dos operaciones: una de despojamiento y otra de revestimiento⁵⁸. La Revolución procuró por todos los medios crear un nuevo ciudadano de acuerdo a su concepción de la democracia, teniendo para ello que suprimir buena parte de los atributos de la ciudadanía social-clientelar que el peronismo había consolidado, de acuerdo a su modelo societal corporativista. La escuela había sido un ámbito muy especial -aunque no exclusivo- de la difusión doctrinaria peronista⁵⁹, cuya meta era crear una nueva identidad política nacional que fagocitara las identidades diferentes. La Revolución escogió similar camino de exclusión, pero sin lograr el mismo éxito.

La concepción liberal ilustrada de la educación como garantía de la libertad, y de madurez intelectual del electorado otra vez ganaba vigencia. En este contexto, la libertad aportada por la pedagogía escolanovista, como contribución a la construcción de una ciudadanía desde abajo, hubiera sido muy funcional a la reeducación en las ideas de libertad restringida promovida por la Revolución: un sujeto participante en el espacio escolar, inserto en una familia de sujetos políticamente excluidos. Niñez y ciudadanía son conceptos con relativa convergencia puesto que el menor no pudo -ni puede hasta el momento- ser considerado ciudadano pleno, incluso en experiencias pedagógicas de democracia escolar. Es interesante rescatar la pregunta de E. Jelin⁶⁰ ¿Cómo se aprende a ser ciudadano? Evidentemente no podía haber un aprendizaje de las expectativas diversas y recíprocas de los sujetos educativos en un marco de expulsión de un sector de la comunidad política. Sugestivamente, persuasión peronista y reeducación «libertadora» contienen similares componentes de intolerancia.

La exclusión política y el intento reeducador no sólo no impidieron la perpetuación del peronismo como imaginario, sino que probablemente alentaron su supervivencia, puesto que se produjo su resignificación en un marco épico de la resistencia⁶¹, asumiendo un carácter clasista originalmente ausente en la doctrina justicialista. De todos modos, la mantención de buena parte de los derechos sociales y de un considerable grado de ciudadanía «pasiva» o «privada» -seguridad, prosperidad y libertad-⁶² por parte de la Revolución, contribuyó a generar un actitud adaptativa de quienes eran beneficiarios de estos derechos.

Notas:

¹ Este trabajo se originó en el marco de la investigación sobre el tema *Historia de la Educación en la Provincia de Santa Fe (1885-1984)*, dirigida por el Prof. Edgardo Ossanna, de la cual fueron publicados algunos resultados parciales en el artículo «Una aproximación a la educación en Santa Fe, de 1945 a 1983», en OSSANNA, E. (Coord.) (1997), *La educación en las provincias 1945-1983*, Buenos Aires, Editorial Galerna. Agradecemos al Dr. Waldo Ansaldo por el aporte teórico sobre la problemática de la ciudadanía que nos ha proporcionado su seminario de doctorado «La construcción histórica de la ciudadanía en Argentina y Uruguay», dictado en la Universidad Nacional de La Plata en 1999.

² Los textos sobre politización del sistema educativo son diversos. Excluyendo los referidos al ámbito universitario, podríamos mencionar como esenciales los siguientes: CIRIA, Alberto (1983) «Peronismo para escolares», en revista *Todo es Historia*, n° 199; WIÑAR, David (1970) *Poder político y educación. El peronismo y la CNAO*. Buenos Aires, CICE-Di Tella; TEDESCO, Juan Carlos (1980) «La educación argentina entre 1930 y 1955» en *El País de los Argentinos*, primera historia integral, n° 185. Buenos Aires, CEAL; PLOTKIN, Mariano (1993) *Mañana es San Perón. Propaganda, rituales y educación en el régimen peronista (1946-1955)*, Editorial Ariel, Buenos Aires; CUCUZZA, Héctor Rubén (Dir.) (1997), *Estudios de Historia de la Educación durante el primer peronismo (1943-1955)*, Universidad Nacional de Luján/ Ed. Libros del Riel, Buenos Aires. Líneas de trabajo diferente pueden encontrarse en PUIGGRÓS, Adriana y BERNEITI, Jorge Luis (1993) *Peronismo: Cultura política y Educación (1945-1955)*, Ed. Galerna, Buenos Aires; PUIGGRÓS, A. (Dir.) (1995), *Discursos pedagógicos e imaginario social en el peronismo (1946-1955)*, Ed. Galerna, Buenos Aires. Los textos referidos a la Revolución Libertadora editados en Argentina son en cambio escasos y siempre sobre temáticas más abarcativas, entre los más difundidos pueden citarse BRASLAVSKY, Cecilia (1980) «La Educación Argentina (1955-80)»; en *El País de los Argentinos*, N° 141, Buenos Aires, CEAL; MARTÍNEZ PAZ, Fernando (1986) *El Sistema Educativo Nacional*, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba; NACIMENTO, Rosa (1985) «El sistema educativo argentino: breve historia desde 1930», en HILLERT, Flora y otros, *El sistema educativo argentino, Antecedentes, formación y crisis*, Buenos Aires, Editorial Cartago; PUIGGRÓS, A. (Dir.) y OSSANNA, Edgardo (Coord.) (1997) *La Educación en las Provincias (1945-1985)*, Ed. Galerna, Buenos Aires; PUIGGRÓS, A. (1997) *Dictaduras y utopías en la historia reciente de la educación argentina (1955-1983)*, Ed. Galerna, Buenos Aires. Únos de los pocos trabajos que toca específicamente la problemática de la educación y la ciudadanía referida al periodo peronista es el de Miguel Somoza Rodríguez, quien señala como atributos del ciudadano ideal para el Justicialismo ser «movilizado, politizado, plebicitario, organizado, disciplinado y alfabetizado»², rasgos que según el autor definirían un nuevo tipo de ciudadanía «de masas», acorde con un gobierno de tipo populista, contrastando con un tipo de ciudadanía anterior de tipo «liberal clásica» aunque con características propiamente nacionales. Entendemos que este tipo de definiciones lleva a una identificación de la condición de «ciudadano» con la de «sujeto político», por ello Somoza entiende que «se redujo las potencialidades de la categoría «ciudadanía» mediante la operación de asimilar «ciudadano», a «pueblo», a «peronista» y a «argentino» -lo cual naturalmente es cierto aunque no exclusivo-. Esta serie induce a pensar en una ciudadanía más restrictiva y menos compleja de la realmente existente durante el peronismo, puesto que, en verdad, la condición de peronista nunca llegó a ser requisito de ciudadanía, aunque sí de una ciudadanía plena. El objetivo de este trabajo ha sido en cambio el de articular los diferentes niveles en los cuales opera la ciudadanía -básicamente civil, político y social- con el fenómeno educativo, centrandó nuestra atención en los fluctuantes derechos de ciudadanía. Ver SOMOZA RODRÍGUEZ, M. (1997) «Una mirada vigilante» en CUCUZZA, Héctor Rubén (Dir.), *Estudios de Historia de la Educación ...*, op. cit, p. 133.

³ NOYA MIRANDA, Francisco (1997), «Ciudadanía y capital social. Estudio preliminar en torno a Ciudadanía y clase social», en *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, Ed. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, julio-septiembre.

⁴ Sobre los controles ideológicos instaurados por el gobierno justicialista, la Comisión Nacional de Investigaciones creada por el gobierno revolucionario en 1955 constató la existencia en el Ministerio de Educación de una «vasta y compleja organización administrativa policial, estrictamente secreta», creada durante el ministerio de Méndez San Martín, cuyo fin era centralizar información sobre personas empleadas en las instituciones educativas del país, en las oficinas de Gestión Universitaria y la de Servicios de Enlace y Coordinación -conectada con la Policía Federal-. Según dicha Comisión, en ellas fueron encontrados más de 70.000 legajos con información política y económica de personas, así como listados de profesores que habían rehusado firmar el pedido de reelección presidencial; y órdenes de detención y suspensión de estudiantes. Ver *La Capital*, diario de la ciudad de Rosario, 21/10/1955, p. 5; 23/10/1955, p. 5.

⁵ Resulta interesante señalar que en la provincia de Santa Fe fue el Ejército la institución que en primer término se hizo cargo, pacíficamente, del control del espacio físico de la Universidad del Litoral, postergando las pretensiones en tal sentido de la Federación Universitaria del Litoral, lo cual no obstaculizó que ésta acompañara activamente el acelerado proceso de desperonización de la educación superior. Ver *La Capital*, 1/10/1955, p. 3.

⁶ Decretos y Resoluciones Generales, Decreto Ley N° 4161 (Buenos Aires, 05/03/1956), «Prohibición de utilizar propaganda del régimen depuesto», en Provincia de Santa Fe, Ministerio de Educación y Cultura, *Boletín de Educación*, vol. I, n° 5, Santa Fe, mayo de 1956, p. 11.

⁷ *Boletín de Educación*, vol. I, n° 5, Santa Fe, mayo de 1956, p. 11.

⁸ *Boletín de Educación*, vol. I, n° 2, Santa Fe, febrero de 1956, p. 52-53.

⁹ *La Capital*, 27/9/1955, p. 4.

¹⁰ Dirección General de Educación, Resolución N° 6400 (Santa Fe, 31/08/56), «Destrucción de imágenes, símbolos, signos, escudos, etc. Referentes a la tiranía - depositados en locales escolares», en *Boletín de Educación*, vol. I, n° 10, Santa Fe, octubre de 1956, p. 29. Obviamente también se prohibió la edición y venta de libros de texto con consignas propias del peronismo, estableciéndose penas que iban desde multas hasta clausura de comercios. Al respecto ver *Boletín de Educación*, vol. I, n° 8, Santa Fe, agosto de 1956, p. 27. *La Capital*, 30/9/1955, p. 2.

¹¹ Decretos y Resoluciones Generales, Decreto Ley 4258 (Buenos Aires, 06/03/1957), «Inhabilidad para ocupar cargos públicos», en *Boletín de Educación*, vol. I, n° 5, Santa Fe, mayo de 1956, p. 12.

¹² Decretos y Resoluciones Generales, Resolución N° 5697 (Santa Fe, 22/03/1956), «Inhabilidad para desempeñar cargos públicos», en *Boletín de Educación*, vol. I, n° 5, Santa Fe, mayo de 1956, p. 12. El reemplazo del Ministro Antonio Arroyo por Eduardo Simoniello no representó variaciones en la orientación de la política educativa, puesto que éste se había desempeñado como Subsecretario de Educación desde el primer momento. La promoción de Simoniello se debió a que Arroyo fue designado Ministro de Gobierno, Justicia y Culto el 15 de febrero de 1956.

¹³ *Boletín de Educación*, vol. I, n° 2, Santa Fe, febrero de 1956, p. 30. Fue derogado el decreto n° 551 del 12/4/1954, que fijaba las funciones de los «tutores escolares». Ver *Boletín de Educación*, vol. I, n° 2, Santa Fe, febrero de 1956, p. 32.

¹⁴ Dirección General de la Educación, Decreto N° 01256 (Santa Fe, 30/01/1956, Garzoni), «Prueba de antecedentes para el personal que tuviera a cargo el dictado de cátedras», en *Boletín de Educación*, vol. I, n° 3, Santa Fe, marzo de 1956, p. 38.

¹⁵ Las escuelas Normales provinciales estaban ubicadas en Rafaela, Casilda, Cañada de Gómez, Coronda, Villa Constitución, Reconquista y Venado Tuerto, todas ellas ciudades que no superaban los 40.000 habitantes. Su intervención fue decretada el 14 de octubre de 1955. La participación de padres de alumnos y de vecinos fue frecuente tanto en las denuncias de abusos durante el gobierno peronista como solicitando reincorporación de docentes cesantes debido a la persecución política, e incluso en el caso de la escuela normal de Villa Constitución llegaron a vetar, por motivos políticos, a la interventora designada. Ver *La Capital*, 15/10/1955, p. 6; 20/10/1955, p. 2; 21/10/1955, p. 2.

¹⁶ *Boletín de Educación*, vol. I, n° 7, Santa Fe, julio de 1956, Decreto n° 07300 de denegación de reconsideración de cesantía, p. 40.

¹⁷ *Boletín de Educación*, vol. I, n° 9, Santa Fe, septiembre de 1956, decreto n° 9375, p. 29.

¹⁸ Departamento Jurídico de Disciplina y Apelaciones, Resolución N° 5460 (Santa Fe, 09/01/56, Arroyo), en *Boletín de Educación*, vol. I, n° 3, Santa Fe, marzo de 1956, p. 15. Una muestra del cuidado por la imagen pública de la investigación fue la decisión del Ministro Simoniello de reemplazar a la interventora designada para la Escuela Normal de Reconquista al tomar conocimiento de su anterior enemistad con el personal directivo de la institución a intervenir, acusado de complacencia con el gobierno depuesto. Ver *La Capital*, 28/10/1955, p. 2.

¹⁹ Dirección de Personal, Decreto N° 13317 (Santa Fe, 27/09/1956, p. 36, Garzoni), «Descenso de Categoría. Reubicaciones», en *Boletín de Educación*, vol. I, n° 11, Santa Fe, noviembre de 1956, p. 36.

²⁰ *Boletín de Educación*, vol. I, n° 2, Santa Fe, febrero de 1956, p. 34.

²¹ Sin embargo aún en 1958 no se había dictado una resolución definitiva sobre los concursos de 1953, y al parecer la Intervención culminó sin que se hiciera.

²² *La Capital*, 13/10/1955, p. 4; 15/10/1955, p. 4. Estos docentes habían sido desplazados de su cargo sin sumario previo. No obstante, fue rechazado, por motivos jurídicos y económicos, el pedido de los maestros reincorporados de cobrar retroactivamente los salarios que les hubiera correspondido durante el tiempo de la cesantía.

²³ *La Capital*, 24/1/1956, p. 2.

²⁴ *Boletín de Educación*, vol. III, n° 1-2-3-4, Santa Fe, enero, febrero, marzo y abril de 1958, p. 80.

²⁵ *Boletín de Educación*, vol. I, n° 7, Santa Fe, julio de 1956, pp. 13-14.

²⁶ *Boletín de Educación*, vol. I, n° 5, Santa Fe, mayo de 1956, pp. 41-42.

²⁷ *Boletín de Educación*, vol. I, n° 11, Santa Fe, noviembre de 1956, p. 20.

²⁸ Además del declarado antiperonismo, resurgía en forma aún encubierta el anticomunismo -en respuesta a la otra peligrosa forma de «totalitarismo»- que se convertiría en ley unos pocos años después; durante la presidencia de Frondizi, reflejándose en el sistema educativo por medio del Decreto Ley 09477, sobre *Estabilidad y Disciplina* del magisterio -del 27/8/1957-, donde se volvía a apelar a la peligrosamente ambigua expresión: «la prédica de ideas contrarias a la nacionalidad y a la organización republicana y democrática del país» para volver punible cualquier transgresión ideológica.

²⁹ La asignatura se creó por el Decreto N° 7625, del 30/12/1955. Representaba la antítesis de la asignatura *Cultura Ciudadana*, que había sido suprimida en octubre del mismo año.

³⁰ *Libro Negro de la Segunda Tiranía* (1958), Buenos Aires. Aunque no se consigne en el libro, se trata de una edición oficial. Esta obra es la síntesis que J. Noé realizó, con supervisión del gobierno, en base a los informes de la Comisión Nacional de Investigaciones. Esta había sido creada el 7 de octubre de 1955 y funcionó hasta el 15 de abril de 1956.

³¹ SÁNCHEZ VIAMONTE, Carlos, y AVELEDO, Amaranto (1957), *Educación Democrática*, tercer curso, Ed. Kapelus.

³² El Interventor Federal Vicealmirante Carlos A. Garzoni asumió en los primeros días de octubre de 1955, luego de la fugaz gestión del Coronel Pica.

³³ Discurso del Ministro de Educación y Cultura, Dr. Eduardo Simoniello, con motivo de la creación del Consejo Gral. de Educación, 19/06/1956, en *Boletín de Educación*, vol. I, n° 8, agosto de 1956, p. 6.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ El Ministro Hereñú había sido inspector general de escuelas de la provincia de Santa Fe en 1929 y vicerrector del Colegio Nacional desde 1932 a 1947; fue separado de su cargo por el gobierno peronista y reincorporado en 1956 en el cargo de Rector del Colegio Nacional e interventor de la Escuela Superior de Comercio. Ese mismo año el Interventor Federal Carlos Garzoni lo designó Ministro de Educación y Cultura.

³⁶ *Boletín de Educación*, vol. II, n° 1, enero de 1957, p. 6.

³⁸ ASCOLANI, A., MOSCATELLI, M., y PÉREZ, A. (1999), *La educación en la provincia de Santa Fe, desde la colonia al presente*, Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe, y *Diario La Capital*, fascículo N° 15, Colección *Historias de nuestra región*, Rosario.

³⁹ El Ministro Prof. Adelmo Montenegro estuvo a cargo de la cartera de Educación y Cultura hasta octubre de 1957, pasando luego a desempeñarse como Ministro de Gobierno, Justicia y Culto. En su reemplazo asumió el escribano Francisco Héctor Landó, quien permaneció en este cargo hasta el final de la Intervención federal del Dr. Clodomiro Carranza, es decir hasta el traspaso del mando al gobierno constitucional elegido en 1958.

⁴⁰ PINEAU, Pablo (1991), *Sindicatos, Estado y Educación técnica (1936-1968)*, Buenos Aires. CEAL.

⁴¹ *Boletín de Educación*, vol. I, n° 6, junio de 1956, p. 41.

⁴² *La Capital*, 21/2/1956, p. 4.

⁴³ Discurso del Ministro de Educación y Cultura, Dr. Antonio Arroyo, 10/10/1955, en *Boletín de Educación*, vol. I, n° 1, Santa Fe, enero de 1956, p. 4.

⁴⁴ *Boletín de Educación*, vol. I, n° 9, Santa Fe, septiembre de 1956, decreto n° 09377, p. 26.

⁴⁵ Dirección General del Ministerio, Decreto N° 03457 (Santa Fe, 16/03/1956, Garzoni), «Intervención a la Asociación de Docentes de la Provincia», en *Boletín de Educación*, vol. I, n° 5, Santa Fe, mayo de 1956, pp. 27-29 y 36-37.

⁴⁶ *Boletín de Educación*, vol. I, n° 6, junio de 1956, p. 29.

⁴⁷ Sobre las características del gremialismo docente santafesino y nacional de las décadas del '20 y '30 puede verse ASCOLANI, Adrián (1999), «Apóstoles laicos, burocracia estatal o sindicalistas? Dilemas y prácticas del gremialismo docente en Argentina (1916/1943) en *Anuario de Historia de la Educación*, n° 2, Sociedad Argentina de Historia de la Educación, Buenos Aires.

⁴⁸ Discurso del Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Dr. Eduardo Simoniello, pronunciado al poner en su cargo al Inspector General de Escuelas, Santa Fe, 18/10/1955, en *Boletín de Educación*, vol. I, n° 1, Santa Fe, enero de 1956, p. 6.

⁴⁹ La Federación Provincial del Magisterio realizó su 26° Congreso el 26 de enero de 1956, con la presencia de los principales funcionarios del Ministerio de Educación. Por otro lado las entidades gremiales reconocidas participaron de la revisión de programas, preparación de escalafones, y como parte de la Comisión Investigadora designada para el Ministerio de Educación.

⁵⁰ *La Capital*, 25/1/1956, p. 4.

⁵¹ *Boletín de Educación*, vol. II, n° 1, Santa Fe, enero de 1957, p. 5.

⁵² La huelga duró desde el 20 de febrero de 1957 hasta el 18 de abril. Los representantes gremiales fueron Antonio Lesiza, Raúl Gentili, Pedro Ballardini, Juan N. Paviotti y Sta. Amelia Martínez Trucco. En consideración del petitorio hecho por entidades gremiales de aumento de retribuciones del magisterio, y considerando que en Santa Fe son reducidas, el Interventor decreta un aumento de 200% mensuales en el sueldo de los maestros de grado de modo que el básico se elevaría a 1.300\$. Al personal administrativo docente se le aumentó 175% y al de servicio 150%. El 10 de mayo fueron decretados los aumentos en los sueldos básicos y bonificaciones especiales -lo mismo se hizo con los otros empleados provinciales-. Los nuevos salarios eran los siguientes: Inspector general 4.000\$, inspectores seccionales 3.500\$, director principal 2.800\$. Ver *Boletín de Educación*, vol. II, n° 5-6-7, Santa Fe, mayo-junio y julio de 1957, pp. 17 y 22-23; n° 11, noviembre de 1957, p. 12.

⁵³ Discurso del Ministro de Educación y Cultura, Dr. E. Simoniello, Santa Fe, 19/06/1956, en *Boletín de Educación*, vol. I, n° 8, Santa Fe, agosto de 1956, p. 6.

⁵⁴ Igualmente, al reestructurarse el Tribunal Disciplinario del Magisterio se estableció que el magisterio de la provincia elegiría por voto directo un titular y dos suplentes. El representante titular debería residir en la ciudad de Santa Fe mientras dure su mandato, siendo «relevado de sus funciones escolares, quedando a disposición de la Dirección de Asuntos Jurídicos donde se le asignarán tareas de orden técnico».

⁵⁵ En cumplimiento de la Ley 3669, del 10/7/1950 que aprobaba el *Estatuto del Personal Escolar de los Establecimientos de Enseñanza Particular*, el sueldo de los maestros particulares había sido aumentado, acercándose al de los estatales -un 20% menor. De esta remuneración el Estado debía contribuir con no más de las dos terceras partes.

⁵⁶ Dirección General de la Educación, Decreto N° 8685, (Santa Fe, 26/06/1956, Garzoni), «Congreso Gremial de Enseñanza Privada. Asimilarse las remuneraciones de los docentes particulares a las de los docentes oficiales», en *Boletín de Educación*, vol. I, n° 8, Santa Fe, agosto de 1956, p. 30; n° 9, septiembre de 1956, p. 22.

⁵⁷ *Libro Negro de la Segunda Tiranía*, Buenos Aires, 1958.

⁵⁸ CAPELLA, Juan Ramón (1993), *Los ciudadanos siervos*. Ed. Trotta, Madrid.

⁵⁹ CUCUZZA, Héctor Rubén (Dir.) (1997), *Estudios de Historia de la Educación ...*, op. cit., pp. 20-21.

⁶⁰ JELIN, Elizabeth (1996) «La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad»; en *Construir la Democracia: Derechos Humanos, Ciudadanía y Sociedad en América Latina*, Ed. Nueva Sociedad, Caracas, p. 113-130.

⁶¹ Así lo sugiere acertadamente Alain ROUQUIÉ (1986), *Poder militar y Sociedad política en la Argentina*, tomo II, Hyspanérica, Buenos Aires, p. 141.

⁶² KYMLICKA, Will y WAYNE, Norman (1998), «El retorno del ciudadano», en *Cuadernos del CLAHE*, N° 75, Montevideo, 2° Serie, año 20.